

DE LA VIA CHILENA AL SOCIALISMO AL MODELO NEOLIBERAL DE LIBRE MERCADO

Jorge Gilbert Ph.D.

Este trabajo examina las características más importantes del proceso político chileno entre 1970 y 1990. Distinguimos dos momentos históricos, los cuales presentan características muy especiales y específicas: un primer momento que va entre 1970 y 1973, es decir el gobierno de la Unidad Popular (U.P.), y un segundo momento, correspondiente al Estado militar que se inicia el 11 de septiembre de 1973 y que termina con la elección de Patricio Aylwin a la presidencia de la república, en 1990.

Comenzamos el análisis con una rápida visión de la evolución del Estado chileno, de su economía y el comportamiento de sus clases sociales para comprender los drásticos cambios experimentados por ese país durante las últimas tres décadas del siglo veinte. Sostenemos que el triunfo de la Unidad Popu-

El presente trabajo fue publicado en el libro "Formaciones Sociales e Identidades Culturales en la Literatura Hispanoamericana: Ensayos en Honor de Juan Epple", editado por Rosamel Benavides y publicado por Ediciones Barba de Palo, Valdivia, Chile, 1997.

lar se debió más que nada a las contradicciones producidas al interior de los sectores dominantes más que a la madurez del sistema político y constitucional chileno, o al profesionalismo de sus Fuerzas Armadas. Observamos en que el movimiento obrero y popular sufrió una derrota militar de la cual aún no se recupera, y que junto a los sectores medios asalariados, los pequeños y medianos empresarios han absorbido el costo social del nuevo modelo económico. Señalamos que el rechazo por parte de la mayoría de la sociedad a los proyectos sociales, políticos y culturales durante el Estado militar han dado paso en la democracia a un continuismo económico que incluso ha puesto en jaque a la diversidad y pluralismo cultural que caracterizaban al país. Reflexionamos acerca del tratamiento condescendiente y entreguista que reciben estos importantes temas por parte de las ciencias sociales dentro del modelo neoliberal chileno. Concluimos en que la esperanza puesta en el proyecto societal neoliberal parece ser la vía que conducirá a una nueva frustración a millones de chilenos y latinoamericanos con el advenimiento del siglo veintiuno.

I. ANTECEDENTES DEL CAPITALISMO DEPENDIENTE CHILENO

Para entender los hechos que generaron la crisis del Estado chileno que termina el 11 de septiembre de 1973 con la instauración de un gobierno militar es necesario mencionar brevemente algunos antecedentes históricos importante del complejo panorama político de este país.

Desde fines del siglo diecinueve, Chile constituyó un tipo de capitalismo dependiente caracterizado como una economía de *enclave* minero, centrada alrededor de la producción de salitre en su primera etapa y cobre a partir del primer cuarto del siglo veinte. Esta característica condujo, por un lado, al desarrollo de un importante proletariado independiente y combativo, que muy pronto se organiza a través de sus propias organizaciones y partidos obreros, siendo el Partido Comunista—fundado en diciembre de 1920—y el Partido Socialista—fundado en abril de 1933—los más importantes. Por otro lado, la economía de enclave también contribuyó al desarrollo de Estado y a un rápido crecimiento urbano en alguna ciudades de Chile dando origen a un importante sector intermedio de funcionarios estatales, técnicos y profesionales—pequeña burguesía—los cuales se agruparon en torno al Partido Radical—de orientación social demócrata.

Al término de la década de los treinta y hasta 1945, tanto los partidos Comunista y Socialista junto al Partido Radical forman el Frente Popular, el cual bajo la hegemonía de los sectores de la pequeña burguesía—con el Presidente Pedro Aguirre Cerda: 1938-1941—inician un programa nacional desarrollista-popular. El aspecto central de este programa se centra en la promoción activa de un proceso de industrialización orientado a producir internamente artículos de consumo tales como vestuarios, calzado y alimentos, más conocido como “substitución de importaciones”. Sin embargo, alrededor la mitad de la década de los cincuenta este proceso comienza a dar

señales de agotamiento, expresado a través de un fuerte endeudamiento externo, inflación, desempleo, tensiones sociales y políticas.

Dentro de la de crisis de los cincuenta, que afecta a la sociedad chilena y profundiza las contradicciones entre sus clases sociales, se lleva a cabo la elección presidencial de 1958. Este año, el candidato de la derecha, Jorge Alessandri Rodríguez, accede al poder al vencer, por un margen muy estrecho de votos, al candidato del Frente de Acción Popular, el socialista Salvador Allende. Las clases dominantes, a través del gobierno de Alessandri—1958-1964—intenta resolver la crisis de acumulación originada por el estancamiento del proceso de industrialización sustitutiva a través de la implementación de un “programa de estabilización” económica, el cual concluye en el más rotundo fracaso. En este contexto, se genera un nuevo modelo reformista, esta vez a cargo de la democracia cristiana para enfrentar la elección presidencial del año 1964 y detener a la izquierda encabezada una vez más por Salvador Allende. Nuevamente el candidato socialista es vencido, resultando electo el representante demócrata cristiano, Eduardo Frei Montalva—1964-1970.

El proyecto de gobierno de Eduardo Frei incluyó un conjunto de medidas entre las cuales se pueden destacar las siguientes: 1] ampliación del mercado interno por medio de la redistribución del ingreso y la reforma agraria; 2] aumento de la productividad a través de la modernización del aparato productivo y el uso de nuevas tecnologías, ambas bajo el auspicio de la inversión extranjera; 3] aumento de las utilidades de los empresarios industriales por medio de la reactivación del mercado interno, lo cual se lograría a través del abaratamiento de los costos de los productos de consumo básico, principalmente alimentos, vía aumento de la productividad del sector agrícola; 4] finalmente, adquisición del 51% de las acciones de la Gran Minería del Cobre, proyecto más conocido como la “chilenización” del cobre.

El éxito inicial del programa de la democracia cristiana condujo a una relativa calma entre los diferentes sectores sociales del país. Sin embargo, alrededor de 1966 se comienza a observar un nuevo estancamiento de la economía acompañada por una alza inflacionaria, aumento del desempleo y la carestía de la vida. El gobierno de Frei pone en marcha un plan de estabilización que en el fondo significó terminar las medidas populistas que habían caracterizado la primera parte de su gestión. De este modo el gobierno pasa de una política de manipulación popular a otra donde se intenta frenar las crecientes movilizaciones de masas, aunque sea a costa de reprimirlas violentamente por medio de los aparatos policiales y militares.

Esta política genera una rápida reactivación y radicalización del movimiento obrero y popular que sólo se detendría con la derrota militar sufrida en manos de las fuerzas armadas chilenas el 11 de septiembre de 1973. Pero, durante gobierno de Frei no sólo se agravan las contradicciones entre las fuerzas del proletariado y sus aliados con el gobierno sino que, a la vez, se profundiza la crisis al interior de los sectores dominantes mismos. Este elemento de crisis interna constituye el ingrediente que permitirá el triunfo electoral de Salvador Allende y la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970.

II. LA CRISIS DE LAS CLASES DOMINANTES: 1964 - 1970

En la historia política chilena del siglo veinte muy pocos períodos presentan transformaciones tan extremas y drásticas en tan corto tiempo como las que ocurrieron entre el 4 de septiembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. En efecto, la década que se inicia con la elección a la presidencia de la república del socialista Salvador Allende y la coalición de izquierda llamada Unidad Popular, termina el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar de ultraderecha que instala en el poder al General Augusto Pinochet por 17 años.

Para entender los elementos que contribuyeron al triunfo de la Unidad Popular es necesario analizar retrospectivamente los cambios que ocurrieron al interior de la sociedad chilena durante la década anterior. Se ha sostenido por algunos, que el triunfo del socialista Salvador Allende se debió a la madurez alcanzado por el sistema democrático chileno y fundamentalmente el profesionalismo de sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, los hechos demuestran que a finales de los sesenta, tanto la estructura económica como la estructura socio-política de Chile enfrentaban una severa crisis, expresada a través de los crecientes conflictos sociales y las cada vez más frecuentes interferencias y acciones de los militares en contra del gobierno del presidente Eduardo Frei.

Si bien es cierto que la sociedad chilena había demostrado una aparente calma y un desarrollo político diferente al resto de los países del continente durante las dos décadas anteriores, esto obedecía a factores bastante *sui generis*. En efecto, basados en la Constitución Política del año 1925, los sectores dominantes tradicionales se las ingeniaron durante las décadas de los cincuenta y los sesenta para, de una u otra manera, ofrecer opciones políticas viables al resto de las fuerzas sociales del país. En ese sentido, el movimiento popular chileno, sus diversas organizaciones y partidos políticos optaron por la arena electoral para resolver los conflictos y enfrentar a las clases dominantes. Carentes de amenazas revolucionarias e insurrecciones armadas los sectores oligárquicos y empresariales ligados al gran capital internacional fueron capaces de desarrollar diferentes maniobras políticas para mantener sus privilegios económicos sin necesidad de recurrir a situaciones extremas, como el golpe de estado de 1973, a pesar que su habilidad para maniobrar políticamente había comenzado a deteriorarse rápidamente.

La crisis política-económica que se produce al interior de la sociedad chilena durante el gobierno de Eduardo Frei impacta fuertemente

a las clases dominantes. Se originan agudos conflictos que no logran ser resueltos antes de la elección presidencial de 1970. Como resultado, no es posible establecer una alianza electoral que permita enfrentar en forma unida al candidato de la izquierda, tal como ocurrió en las elecciones de 1964, cuando los sectores empresariales y oligárquicos del país se agruparon en torno al candidato de la democracia cristiana para enfrentar y derrotar a Salvador Allende, apoyado por el Frente de Acción Popular (FRAP). En efecto, durante los comicios electorales del 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende resultó electo con casi el mismo número de votos obtenidos en la anterior contienda presidencial de 1964 cuando fue derrotado por Eduardo Frei—36% de los votos.

Los sectores industriales chilenos antes de Allende

Al comienzo del gobierno de Eduardo Frei en octubre de 1964, la estructura económica chilena comienza a orientarse hacia un nuevo tipo de industrialización, esta vez basado en la producción de bienes de capital y consumo suntuario en reemplazo del *sector industrial tradicional*—textiles, ropas, zapatos—iniciada a finales de los años treinta— más conocida como sustitución de importaciones. Durante esta segunda etapa, el proceso de industrialización se convierte en un sistema productivo más *dinámico* ligado a la fabricación de artículos electrónicos, suntuarios, automóviles y la petro-química, pero a diferencia del modelo anterior, totalmente subordinado al gran capital internacional (Marini: 1974: 59).

Este nuevo modelo industrial dinámico se orienta principalmente hacia los sectores nacionales con altos niveles de consumo y al mercado internacional, lo que explica el énfasis puesto por la administración Frei en la formación de acuerdos comerciales tales como el Pacto Andino y la Asociación Latino Americana de Libre Comercio (ALALC). Lo anterior constituye un importante elemento en el apoyo

y expansión de mercados internos limitados en los países afiliados a este tipo de tratados comerciales.

La nueva diversificación industrial fue acompañada por un significativo aumento de las tasas de inversión en este sector de la economía generando una gran demanda de mano de obra. En un período de seis años— 1960 y 1966—el sector manufacturero se transforma en la fuente de empleos más importante del país al absorber 164 mil 500 nuevos trabajadores, alcanzando un total de 620 mil 700 personas, lo que representa el 22.4% del total de empleos en el país de acuerdo a las cifras proporcionadas por CEDEM-ILPES (1968: Cuadro IV). Sin embargo, este proyecto requería de condiciones laborales “ideales”, las cuales permitieran aumentar las tasas de ganancias al aumentar los niveles de consumo y así concentrar el excedente económico que se obtuviera. En países dependientes como Chile, estas metas se han logrado históricamente a través del aumento de las tasas de explotación de los obreros, proceso conocido como “superexplotación del trabajo” (Marini: 1974; Osorio: 1978; Frank: 1978).

El efecto de esta política salarial se tradujo en una disminución del poder de compra de los trabajadores, repercutiendo más intensamente en los sectores ligados a la industria tradicional, quienes para continuar operando en forma regular requería de un mercado relativamente estable. La carencia de tecnología moderna y lo limitado de su producción impedían que la industria tradicional chilena pudiera competir en el mercado internacional. Por su parte, el declinamiento de la demanda y el consumo interno por parte de la población generó una grave crisis de acumulación que afectó seriamente al sector industrial tradicional, el cual, a su vez, los llevó a aumentar la tasa de explotación de sus obreros a niveles extremos para mantener alguna cuota de ganancia. Lo anterior se complicaba debido a la escasa ayuda recibida por parte del Estado, quién,

por el contrario, se había volcado totalmente hacia la industria dinámica a través del otorgamiento de créditos, préstamos, facilidades para importar equipos, y otras medidas similares. Esta política del gobierno de Eduardo Frei terminó arrinconado a los empresarios industriales nacionales del sector tradicional, quienes debieron cerrar sus fábricas o terminar completamente supeditados al capital extranjero. Así, los grupos empresariales nacionales y extranjeros vinculados al *sector dinámico industrial*, se beneficiaron enormemente con las ventajas ofrecidas por la administración Frei, creando un gran desconcierto y malestar entre el resto de los empresarios nacionales y las fuerzas productivas del país. Esta situación contribuyó a aumentar las crisis al interior de los sectores dominantes impidiendo la posibilidad de lograr una alianza electoral para enfrentar a la coalición de la Unidad Popular.

Los sectores terratenientes chilenos antes de Allende

El conflicto observado al interior de las clase dominantes no se limitó simplemente al sector industrial, sino que también se extendió hacia los sectores vinculados a la agricultura. El sector agrícola, desde hacía ya un tiempo, venía enfrentando también una grave crisis productiva y de acumulación.

La política agraria del gobierno demócrata cristiano del presidente Frei incluía un programa de reforma agraria, el cual formaba parte de un plan elaborado por la administración del Presidente John Kennedy, más conocida como la Alianza para el Progreso. E proyecto norteamericano fue creado en 1961 y su objetivo principal era desarrollar en el agro latinoamericano sectores de clase media que permitieran neutralizar las actividades insurreccionales del movimiento campesino de la región. La Alianza para el Progreso fue una política impulsada entusiastamente por Washington durante los

años sesenta con el objetivo de prevenir la repetición de experiencias similares a la Revolución Cubana en el continente.

El *sector industrial dinámico* vio en la reforma agraria demócrata cristiana un vehículo para reorganizar el sector agrícola del país bajo su hegemonía, afectado por una grave crisis productiva—sistema anticuados—y económica—baja rentabilidad—debido al cierre de los mercados externos o la imposibilidad de competir con otros países. Esfuerzos para disminuir los gastos del Estado a través del aumento de la producción agropecuaria para disminuir la importación de alimentos fueron puestos en práctica. De acuerdo a los estrategias del gobierno dicho plan permitiría transferir las divisas destinadas a este rubro hacia el *sector industrial dinámico* del país.

Al reorganizar la estructura agraria de Chile el gobierno demócrata cristiano buscaba reemplazar al campesinado por sistemas productivos mecanizados y tecnologías agrícolas modernas, lo que permitiría liberar contingentes laborales que engrosarían el ejército industrial de reserva y de este modo, abaratar el valor del salario. Esta situación se tornaba cada vez más necesaria debido a la enorme resistencia encontrada por los sectores empresariales del *sector industrial dinámico* para reducir o eliminar las conquistas salariales y sociales de los trabajadores obtenidas en el pasado.

De esta manera, la reforma agraria contribuyó a aumentar la crisis al interior de las clase dominantes tradicionales al envolver a los sectores de la oligarquía, los cuales obtenían grandes utilidades a través de la renta de la tierra, incluso sin residir en ellas—terratinentes ausentistas. Como era de suponer los sectores de la oligarquía chilena no estaban dispuesta a sacrificar su fuente de acumulación, amenazadas por la reforma agraria de Frei.

Un factor destacado dentro de los objetivos de la reforma agraria de la democracia cristiana consistía en el reclutamiento y organización de los campesinos partido para consolidar una base populista de apoyo que le permitiera respaldar sus iniciativas políticas. Importantes esfuerzos fueron realizados en ese sentido a través de la sindicalización campesina, aunque el gobierno comenzó gradualmente a perder popularidad entre este sector debido a la lentitud y falta de voluntad de las autoridades para agilizar la expropiación de la tierra y la política regresiva salarial que perjudicaba cada vez más sus ingresos. Estos factores terminarían finalmente operando en contra de las aspiraciones de la democracia cristiana y su gobierno en donde la impresionante organización alcanzada por los sindicatos y federaciones campesinas los llevarías a unirse a la de los sectores urbanos, solidificado de esta manera, la alianza obrero-campesina. Lo anterior se combinan, simultáneamente, con una serie de acciones de tipo legales e ilegales realizadas conjuntamente por los sectores de pobladores sin casa—tomas de terrenos— y contingentes estudiantiles—reformas universitarias drásticas.

El triunfo electoral de la Unidad Popular es el producto de la crisis de dominación que se genera al interior de las clases dominantes chilenas a partir de los factores enumerados anteriormente. La victoria popular de Salvador Allende contribuye a incrementar dicha crisis originando nuevas esferas de confrontación dentro de las clases dominantes mismas, como entre éstas y el movimiento popular. Durante este período se agrega el factor que los antagonismos entre los sectores empresariales y el movimiento popular chileno se acentúan debido al nivel de organización de estos últimos, seguidos por una elevación de los niveles de conciencia social que los empuja a introducir cambios drásticos en las estructuras de la sociedad chilena. Así, la Unidad Popular se apodera del aparato político del Estado a través de un proceso electoral limpio y constitucional. En otras palabras, el

triunfo de Salvador Allende se genera dentro de las reglas del juego establecida por los mismos sectores de las clases dominantes y con un programa de gobierno basado en cuarenta medidas. Esta estrategia electoral contiene una serie de elementos que aunque basados en las normas jurídicas del país, ponían en serio peligro las bases de sustentación económica y política del gran capital nacional e internacional.

Como resultado de la pérdida del control político del Estado por parte de los sectores dominantes tradicionales se produce una situación de impotencia y caos que los llevará rápidamente a reorganizarse para reconquistar el poder, incluso a costa de romper su propio modelo de constitucionalidad y democracia que ellos mismo habían diseñado y puesto en práctica partir del año 1925.

III. LA UNIDAD POPULAR: 1970 - 1973

Desde el punto de vista estratégico y táctico, la coalición política de la Unidad Popular que asume el poder en 1970, no constituye una unidad monolítica puesto que en su interior se agrupaban sectores socialdemócratas, clases medias—pequeñoburgueses—reformismo obrero y revolucionarios. La Unidad Popular llega al poder esgrimiendo un programa de reformas radicales basada en 40 medidas, las cuales se consideraban una transición para alcanzar el socialismo. Esta estrategia contenía una serie de mecanismos que a juicio de la Unidad Popular le permitirían incrementar el apoyo popular para luego atacar gradualmente las bases de sustentación de las clases dominantes y el control extranjero de la economía nacional. Sin embargo, este modelo también incluía una política implícita para establecer una alianza con los sectores de la denominada "burguesía progresista", portadora de valores "antiimperialistas, antioligárquicos y antimonopólicos", de acuerdo a la interpretación de la izquierda tradicional chilena, especialmente la interpretación del Partido Comunista.

Basados en esta interpretación, el programa de gobierno de Salvador Allende más que destruir el sistema de dominación chileno se proponía modificarlo gradualmente a través de lo que se designaba como la "revolución por etapas". En ese sentido, el esfuerzo del proyecto de la Unidad Popular durante este período se orientó hacia una mayor democratización de Estado, acompañado por profundas reformas socio-económicas que permitieran la incorporación masiva de amplios sectores de la población al proceso. Durante esta etapa, la base social inicial del gobierno formada fundamentalmente por amplios sectores obreros, campesinos, los pobres de la ciudad y el campo, y sectores de la pequeña burguesía se vería robustecida por la formación de un frente amplio al cual se sumaría la supuesta "burguesía progresista y nacionalista".

La interpretación de la Unidad Popular de la realidad chilena identificaba al "imperialismo, el capital monopólico y a los sectores oligárquicos" como los responsables del atraso y el subdesarrollo de la región. En ese sentido, los ideólogos de esa coalición de gobierno pensaban que esta característica perjudicaba duramente, incluso, a los productores independientes—empresarios ligados al consumo interno—imposibilitando el establecimiento de una alianza estratégica con los sectores medios, portadores de valores nacionalistas, anti-imperialistas, anti-monopolistas y anti-oligárquicos. Esta es la razón que explica entonces, que el programa económico de la Unidad Popular—Programa Básico—se concentrara alrededor de tres áreas productivas: social, mixta y privada.

La estrategia de la Unidad Popular se aplica a través de una política económica cuyos elementos principales pueden resumirse como siguen: 1] en el corto plazo, se intenta implementar una fuerte redistribución del ingreso a través de aumentos salariales y creación de nuevos empleos, acompañado por un incremento substancial del gasto fiscal. Con

esto se pretendía no sólo reactivar la economía del país, sino que, a la vez, se esperaba que esta estrategia permitiría al gobierno acumular fuerzas sociales en el terreno político para llevar a cabo las reformas estructurales proyectadas; 2] implementación de un conjunto de reformas radicales tales como la nacionalización de las empresas extranjeras, especialmente el enclave del cobre, nacionalización de los bancos, expropiación de las empresas monopólicas y su incorporación al Área de Propiedad Social, aceleración de la reforma agraria iniciada en el gobierno de Eduardo Frei, más otras reformas que permitirían al gobierno reorientar la economía del país.

Esta política del gobierno de Salvador Allende tuvo un gran éxito durante el primer período de su gobierno y se demostró en el aumento substancial de la votación obtenido por la Unidad Popular en las elecciones municipales de abril de 1971, alcanzando el 50.9% de los sufragios. Sin embargo, esta victoria electoral profundizó la crisis del capitalismo chileno al amenazar y desafiar abiertamente los intereses del gran capital extranjero, nacional y agrario, los cuales reaccionaron muy pronto. En efecto, mientras que la administración de Richard Nixon y Henry Kissinger desataba una fuerte ofensiva en contra del gobierno de Salvador Allende a través de bloqueos económicos, embargo de cargamentos de cobre en los puertos norteamericanos, cancelación de créditos y ayuda financiera por parte de las agencias internacionales, propaganda tendenciosa a cargo de los medios de comunicaciones en manos de las transnacionales de la noticia, y otras medidas, las clases dominantes nacionales ponían en práctica una doble estrategia. Por una parte, un cerrado bloqueo parlamentario—la Unidad Popular no contaba con una mayoría parlamentaria en el Congreso—y la captación política bajo su hegemonía de las capas medias y sectores no monopólicos del país. Por otro lado, iniciaban un enfrentamiento directo con el gobierno,

terrorismo y sabotajes financiados y facilitados por la C.I.A. a través de la embajada norteamericana en Santiago.

Los sectores no monopolísticos, por su parte, fuera de beneficiarse económicamente por las medidas de reactivación del mercado interno generadas por la Unidad Popular reaccionó políticamente en contra del gobierno y se unió a las filas de la oposición. El temor al proyecto socialista impulsado por la Unidad Popular y al rápido crecimiento y evidente radicalización del movimiento obrero y popular pueden citarse como las principales causas de esta actitud política de dichos sectores no monopolísticos y que se tradujo en ausencia de inversiones y canalización de sus utilidades hacia actividades especulativas—mercado negro, fuga de capitales al exterior y acaparamiento de productos, entre otras.

El movimiento popular, los obreros, los campesinos y especialmente los sectores más postergados de la ciudad y del campo, por su parte, muestran una cada vez mayor radicalización que se expresa a través de continuas tomas de industrias, predios agrícolas, movilizaciones masivas y otras acciones similares. Mientras esta situación va en aumento la crisis se agudiza rápidamente en la medida que el gobierno intenta implantar una política de conciliación con los sectores no monopolísticos, los cuales más que nunca comenzaron a identificarse con la oposición al gobierno de Salvador Allende. Las vacilaciones del gobierno y su política conciliatoria crean una gran confusión entre su ya radicalizada base social la cual se desgasta en luchas internas frente a dos alternativas: una reformista y otra revolucionaria.

Así, la realidad vino a demostrar que los sectores progresistas y nacionalistas al interior de las clases dominantes tradicionales en Chile no existían. Por el contrario, todos ellos, sin excepción, se agruparon como un solo cuerpo una vez que comenzaron a visualizar el rápido crecimiento alcanzado por el proletariado chilenos y sus aliados—

campesinos, estudiantes y pobladores—en términos de organización política, combatividad y conciencia de clase. La sociedad chilena había alcanzado una etapa en la cual la agudización del proceso político la dividía drásticamente en dos sectores claramente antagónicas: por un lado, las clases dominantes tradicionales y sus aliados y por el otro, los sectores obreros y populares. En otras palabras, *el país vivía una etapa preeminentemente are-revolucionaria*. Como resultado se produce un rápido aglutinamiento de las clases dominantes del país en torno a los sectores ligados al gran capital nacional y extranjero para implementar una contra-revolución orientada a paralizar y luego a derrocar al gobierno de Salvador Allende, derrotar al movimiento popular e imponer una política productiva y salarial de acuerdo a sus propios intereses.

Consideramos un error concluir—como muchos lo han hecho—que la Unidad Popular, especialmente el Partido Comunista, fueron un instrumento de las clases dominantes chilenas. Sin lugar a dudas la Unidad Popular buscaba implantar un régimen socialista en el país, aunque la diferencia se centraba en torno a la estrategia para alcanzarlo; es decir, dicha búsqueda se realizaría a través de etapas, hasta completar la revolución democrática-burguesa, tal como lo señaláramos anteriormente. Una vez completado este ciclo, se abrirían las puertas hacia el socialismo.

La estrategia de la Unidad Popular no funcionó de la manera como la entendían sus ideólogos y así, la concepción de “la vía chilena hacia el socialismo” vino a poner en evidencia los errores en la evaluación del comportamiento histórico de las clases dominantes del país. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue un duro golpe para la coalición de gobierno, quienes esperaban una salida política y constitucional a la crisis de gobernabilidad que afectaba cada vez con mayor intensidad a la sociedad chilena. Para el movimiento popular la toma del poder por parte de los militares significó la pérdida

de la totalidad de sus conquistas sociales y económicas, como a la vez, la destrucción de sus organizaciones sindicales, federaciones y partidos políticos.

IV. EL ESTADO MILITAR Y NEOLIBERALISMO

Las contradicciones al interior de las clases dominantes que facilitaron el acceso al poder de Salvador Allende no lograron ser resueltas totalmente durante el período 1970-1973. Lo anterior se manifiesta claramente a través de las diferencias estratégicas entre las fuerzas políticas representadas por la Democracia Cristiana (D.C.) y aquellas del Partido Nacional (P.N.), aunque a medida que el proceso avanzaba dichas diferencias se fueron resolviendo. Las elecciones parlamentarias de marzo 1973 hacen imposible el plan de la Democracia Cristiana de derrocar constitucionalmente al gobierno de Salvador Allende al no lograr la mayoría electoral necesaria que le permitiera acusar constitucionalmente al presidente Allende; por el contrario, los resultados electorales fueron de un abierto apoyo a la Unidad Popular. Esta situación abre definitivamente las puertas a la alternativa golpista del Partido Nacional y se hace más evidente a partir de agosto de ese año durante el fallido alzamiento militar del Regimiento de Blindados Tacna, ocurrido el 29 de junio de 1973.

La sociedad chilena se enfrenta entonces a una crisis de gobernabilidad en donde sus habitantes se encuentran divididos en dos bandos irreconciliables. Las clases dominantes han perdido el control del Estado mientras que el resto de las fuerzas sociales se preparan para tomarlo. La solución por parte de las clases dominantes no es otra que recurrir a las fuerzas militares, las cuales tradicionalmente en Chile han respondido a los intereses del gran capital tanto nacional como extranjero, para resolver sus crisis históricas de acumulación, representación y control del aparato Estado. La diferencia es que esta vez no se trata de una intervención

momentánea, ni muchos menos un tipo de caudillismo al estilo tradicional de los cuartelazos militares latinoamericano del pasado tales como Somaza en Nicaragua, Batista en Cuba o Carlos Ibáñez en Chile. Tampoco se trata de una forma de fascismo en donde una organización política, el Partido Fascista, asalta desde afuera el aparato estatal burgués apoderándose de su conducción (Poulantzas: 1971:118); por el contrario, esta vez el asalto proviene desde el interior mismo de dicho estado burgués, por parte de las Fuerzas Armadas. Esta forma de estado es lo que se designa como Estado militar y tiene en común con el estado fascista o bonapartista en que aparece cuando las contradicciones de clases en su interior se agudizan de tal forma que las crisis de acumulación capitalista no pueden ser resueltas de otra forma provocando una *militarización* de la sociedad (Vasconi: 1978: 54).

Así, las Fuerzas Armadas asumen funciones que en el caso de una democracia—ya sean burguesa, populista u otras—son realizados por funcionarios civiles especializados en el desempeño de dichas tareas, tales como abogados, economistas, jueces, funcionarios de carreras y profesionales, siendo en este caso reemplazados por militares. Lo más importante, sin embargo, es que la *militarización* se proyecta a la totalidad de la sociedad civil adquiriendo características organizativas e ideológicas propias de las Fuerzas Armadas tales como subordinación, verticalidad, disciplina, eficiencia, nacionalismo y otras, todas ellas dentro de una visión caracterizada por un "patriotismo chauvinista". De acuerdo a Vasconi, en el Estado burgués, las Fuerzas Armadas tienen un "lugar" y una "función"; en el Estado militar, ambas características son superadas ampliamente (1958: 55).

En este contexto, el golpe militar chileno del 11 de septiembre de 1973 emergió como el último recurso para detener la crisis que amenazaba con la desaparición del sistema capitalista como tal; asegurar el dominio y con-

trol de la sociedad chilena por parte de clases dominantes, *especialmente asegurando la hegemonía de los sectores financieros nacionales asociados con las grandes corporaciones financieras internacionales*; finalmente, como un mecanismo de reemplazo de los partidos políticos de derecha que habían fracasado en sus funciones de representar y resguardar los intereses políticos y económicos de las clases dominantes al interior de dicho Estado burgués. Para esto es necesario resolver a través de la vía violenta lo que no pudo solucionarse por medio de la vía política. En otras palabras, esta vez se trata de “despolitizar” al país y trabajar sólo motivados por el “interés nacional”.

La eliminación de la actividad política en el caso chileno persigue dos objetivos. En primer lugar se busca resolver el conflicto existente entre los diferentes grupos sociales en pugna en favor de las clases dominantes—contradicción principal. El segundo objetivo es que el conflicto existente al interior de las clases dominantes mismas se resuelva en favor del sector financiero monopolista asociada al gran capital internacional—contradicción secundaria. Así, el modelo económico desarrollado por el gobierno militar chileno buscaba retomar y acelerar el proceso de acumulación capitalista en favor del sector financiero. Al eliminar la contradicción primaria se tendía a satisfacer los intereses de las clases dominantes en su conjunto, mientras que al resolver la contradicción secundaria no sólo terminaba con los conflictos interburgueses sino buscaba conducir hacia una apertura de la economía chilena dentro de una nueva fase productiva neoliberal, insistamos, bajo la hegemonía de los sectores financieros.

La primera medida del modelo neoliberal implementado por del Estado militar chileno consistió en realizar una modernización substantiva del aparato productivo del país por medio de la introducción de nuevas tecnologías para producir bienes orientados al mercado externo. Para financiar dicho proyecto existían dos posibilidades: 1] realizarlo a través de un

substantial aumento de las ventas del cobre y otros productos de exportación; 2] procurar un ingreso masivo de capitales extranjeros a los diferentes rubros de la economía, incluyendo aquellos sectores en manos del Estado. El primer objetivo es difícil y sobre todo muy variable, debido a que los productores nacionales o el Estado no tienen ningún control sobre los precios de los productos de exportación en el mercado internacional. De ahí entonces que los esfuerzos del gobierno militar se concentren en la segunda posibilidad, es decir, aumentar el ingreso del capital foráneo y su participación en la economía del país.

Sin embargo, para alcanzar este objetivo era necesario crear las condiciones básicas para atraer las inversiones extranjeras y reactivar el capitalismo nacional, especialmente en una economía que contaba con un sector laborar notoriamente combativo y organizado. En ese sentido debe entenderse la política de “saneamiento” de la economía, cuyos aspectos principales consideraban la disminución de la inflación y la “liberación” general de la misma. Su aspecto central se basa en la reducción al mínimo de los gastos del Estado—generalmente en educación, servicios sociales, salud, vivienda y obras públicas—junto a la “privatización” del aparato productivo del país, disminuyendo al máximo el rol del Estado, circunscribiéndolo únicamente a asegurar condiciones favorables que faciliten el libre juego del mercado. A esto debe agregarse la eliminación de la política de control de precios y subsidios, el establecimiento de un solo tipo de cambio, eliminación de las tasas arancelarias creadas para proteger la industria nacional, la cual ahora, debe competir con los productos extranjeros, y la reducción violenta de las emisiones de dinero. Finalmente, y como condición final e ideal, este modelo promueve el control de los salarios junto a una intensificación del trabajo—explotación—que permitieran el aumento de la tasa de utilidades de los empresarios nacionales y extranjeros.

La aplicación de este modelo económico neoliberal requería de un contexto jurídico que estimulara y garantizara las inversiones extranjeras en Chile. Leyes y decretos fueron aprobadas por la Junta de Gobierno, los cuales liberaban de todo tipo de proteccionismos, barreras y controles a las inversiones foráneas junto a la posibilidad de repatriar en su totalidad las utilidades obtenidas.

Los resultados de esta política neoliberal fueron evidentes en el corto plazo. En primer lugar, se observa una violenta reducción de los niveles de ingresos de los trabajadores asalariados y como consecuencia, un rápido deterioro de sus niveles de vida, incluyendo a amplios sectores de las clases medias. En segundo lugar, se produce una contracción violenta del mercado interno debido a la pérdida del nivel adquisitivo de la población. En tercer lugar y como resultado de lo anterior se produce la quiebra y el cierre de industrias pequeñas, medianas e incluso industrias grandes dedicadas a la producción interna (alimentos, vestuarios, textiles y otros). En cuarto lugar, se observa un acelerado proceso de centralización y concentración de capitales en manos del sector financiero asociado con el capital extranjero los cuales se posesionaron muy pronto de los centros claves de la economía nacional—bancos, fondos de retiros, comercio exterior, entre otros. Quinto, y como resultado del punto anterior se produjo una rápida “desnacionalización” de la economía nacional integrada y supeditada completamente al nuevo orden internacional por parte de los países desarrollados, fundamentalmente los Estados Unidos.

El movimiento obrero y popular es el más afectado debido a que junto a experimentar una severa derrota militar por parte de las Fuerzas Armadas pasan a ser sometidos a condiciones laborales desventajosas a sus intereses. Al suprimirse los espacios políticos para la discusión y negociación de los conflictos y demandas laborales y económicas el gobierno militar debió recurrir continuamente

al uso de la represión y violencia como mecanismo de persuasión para asegurar el control del Estado y llevar adelante su modelo económico neoliberal. Al mismo tiempo, innumerables esfuerzos e iniciativas fueron puestas en práctica para establecer una dominación ideológica a fin con los grupos en el poder y su modelo neoliberal a través de los diversos mecanismos del Estado tales como medios de comunicaciones de masa, escuelas y universidades, organizaciones de masas, entre otras, para construir una base social de apoyo mínima. Sindicatos e instituciones laborales manipulados por el gobierno y funcionarios burócratas al servicio de las autoridades militares se multiplicaron a lo largo del país eludiendo los planteamientos políticos y tratando de ignorar las demandas reivindicativas de la población. En general, esta política ideológica no funcionó, poniendo en primer plano a acciones de tipo represivas en las relaciones que se originan entre las masas populares y Estado militar. Así, la represión que siguió al golpe militar en las universidades y centros intelectuales, actividades culturales y artísticas no alineadas con las nuevas autoridades, demandas laborales y sociales fueron muy comunes durante este período. Esto explica el severo control impuesto en las universidades, especialmente en el área de la ciencias sociales, la educación en general, la vida intelectual misma, los medios de comunicaciones y muy especialmente en las actividades sindicales y laborales. Miles de intelectuales, periodistas, líderes organizacionales, pobladores, estudiantes fueron perseguidos, relegados, asesinados, exiliados o exonerados de sus cargos durante los 17 años del gobierno militar en Chile.

La política represiva del Estado militar y su drástico modelo económico neoliberal los alienaron incluso del apoyo social inicial de aquellos sectores de la pequeña burguesía, empresarios e industriales nacionales no ligados al sector financiero nacional y sus asociados internacionales. La resistencia al gobierno militar y las sectores dominantes se

intensificó forzando a las autoridades a redoblar la represión pero, al mismo tiempo, establecer ciertas instancias mínimas de diálogo y negociación política para proteger el modelo económico que comenzaba a dar sus frutos. En este contexto nace la idea del plebiscito de 1988, el cual rechaza rotundamente la continuidad del General Pinochet en el poder y luego, las elecciones presidenciales del año 1989 que le dan el triunfo al candidato de la oposición a los militares, el demócrata cristiano Patricio Aylwin por el período 1990-1994.

Si bien es cierto que la inauguración del gobierno de Aylwin es un triunfo y un retorno a la democracia electoral—burguesa—no es menos cierto que los militares dejaron implementado un modelo económico neoliberal bastante consolidado y difícil de eliminar. Recursos legales amparados por una constitución diseñada especialmente para ese modelo económico junto a un sistema electoral y parlamentario que hace casi imposible crear mecanismo de reemplazo, seguido por la inactividad y prácticamente paralización total o atomización del movimiento obrero y popular son la herencia dejada por las Fuerzas Armadas al nuevo gobierno civil.

V. ALGUNOS ELEMENTOS PARA UNA REFLEXIÓN CULTURAL

El proyecto de la Unidad Popular se gesta dentro un marco de participación política de casi todos los segmentos sociales nunca antes vista en el país. Los acontecimientos que ocurren dentro de este período dieron paso a una incuestionable dinámica política y social seguida por una rica y amplia discusión. La vida de la nación, sus calles, murallas, centros laborales, aulas escolares y universitarias, las iglesias, la cultura, el deporte, las artes se plasman del proceso que vive Chile ya sea para cuestionarlo o defenderlo. El país es un escenario y sus habitantes los actores. El público que presencia esta obra es la comunidad internacional aunque muchos extranjeros también vienen a integrarse al

proceso ya sea para entenderlo y aprender de éste, o simplemente para detenerlo y destruirlo.

Los medios de comunicaciones de masas inundan a la población con información y también, desinformación. Los artistas, poetas e intelectuales nutren sus creaciones y mensajes con la alegría y la esperanza de un futuro mejor mientras otros lo hacen con las nostalgia del pasado y los temores e inquietudes del futuro en un Chile que amenazaba transformarse en una sociedad socialista. En otras palabras, cualquiera que fuera el contenido del mensaje el espacio para la comunicación social estaba ahí; ya fueran medios de expresión sofisticados o descoloridas murallas que florecen con los dibujos y consignas pintadas por las manos de las brigadas de artistas populares, expresando toda la pasión y el candor del proceso político que se vivía. Estas formas de expresión, abiertamente polarizadas, pero masivas, sin fronteras o barreras en las manos de la sociedad civil, se terminan el 11 de septiembre de 1973.

El Estado militar, consecuente con su modelo económico neoliberal, da paso a un nuevo parámetro en donde el espectáculo, los medios de comunicación masiva y en especial la televisión, pasan a sustituir la comunicación por la dictadura del mensaje. Los sectores de la sociedad civil, por su parte, al no sentirse interpretados, ni muchos menos como un interlocutor de dichos mensajes se arrinconaron primero en el sueño de la comunicación tradicional, para luego empezar a crear, gradualmente, espacios que les permitieran desarrollar una comunicación popular y alternativa. Lo anterior comienza a expresarse como un recurso de réplica cuyos mensajes se nutren ahora en las acciones de protesta en contra de la tortura y las desapariciones, de la lucha por los derechos humanos, los derechos de la mujer, de los jóvenes, del derecho a vivir en el país, por el retorno a la democracia, el derecho al trabajo, a la vida, entre otros. Todos estos aspectos se concretan

en una comunicación nueva, renovadora, fresca, llena de ironía e imaginación, pero también de obstáculos a las parodias "legalistas" y "políticas" de las autoridades militares. En otras palabras, fueron las necesidades concretas de los sectores populares chilenos las que determinaron no sólo nuevos recursos del mensaje y su contenido, sino que nuevos modos de circulación y valorización de los mismos.

Las noticias, las tareas y las consignas antidictatoriales se pintan en las paredes de las ciudades valiéndose de rápidas y funcionales pinturas aerosol, escritas por ágiles manos nocturnas evadiendo la cancerbera mirada policial. Emerge el teatro callejero con escenificaciones y actuaciones tan rápidas como fumarse un cigarrillo mientras se espera un bus, en respuesta al cierre de los auditorios para hacer teatro, ya fuera crítico, cultural o tradicional. Los ciudadanos se convierten en pintores, poetas, escritores, músicos y artistas populares sumándose a esta tarea no deseada pero necesaria, para romper el encarcelamiento de la inmensa cantidad de chilenos culpados de "disolución social" por el gobierno militar.

Los espacios juveniles se transformaron en fuentes de rebeldía mezclada con abundantes ingredientes de ironía, originadora de anónimos artistas populares los cuales cumplieron con la misión de mostrar el camino a aquellos intelectuales empantanados en problemáticas abstractas en una realidad opresiva muy concreta. Al calor de las luchas por la democracia y el temor de aquellos que oscilaban entre la ambigüedad y el miedo conciliador se comienza a descubrir como burlarse de la represión, de sus funcionarios y la ideología oficial, muchas veces más como un recurso preservador de la propia seguridad que como un elemento descubridor de nociones teóricas-interpretativas.

Aparecen en el país chistes, bromas y comparaciones jocosas acerca de los personajes responsables del terror militar

impuesto sobre gran parte de los chilenos. La nueva práctica de anulación de la comunicación oficial y las expresiones culturales elitistas nacieron y crecieron en esta masa de experiencias compartidas. Los mitos, ritos y sueños de la genialidad solidaria, de la creación inefable, del valor intrínseco de la creación popular, de su carácter de denuncia y cómplice de lo clandestino se convirtieron en dibujos, poesías, cuentos, narraciones, canciones e incluso plegarias que nutrieron las numerosas formas del mensaje creadas por la urgencia comunicativa entre los grupos de chilenos contrarios al régimen militar.

Todas estas acciones cuajaron hacia el fin de los ochenta, con el triunfo del NO en 1988 y el retorno a la sociedad civil en 1989, aunque la sociedad chilena quedó y aún continúa atrapada en una constitucionalidad militar que la oprime y un modelo económico neoliberal en manos de las agencias crediticias internacionales, junto a un número no despreciable de tecnócratas y políticos "renovados" o "reciclados" del pasado. De cualquier forma, es obvio que detrás de estas acciones por parte de los sectores populares estén las consecuencias sociales, políticas y económicas, junto a una rica herencia cultural entre los chilenos.

A través del uso de la reflexión y críticas aplicadas tanto a las nuevas necesidades comunicativas como a la historia de Chile re-descubierta como un enfrentamiento ancestral entre el Estado y las luchas populares de liberación, se organizaron grupos de individuos y se generaron diferentes acciones que se iban desde el chiste pasando por las expresiones artísticas, el testimonio, e incluso, las oraciones coreadas a lo largo de las numerosas iglesias y parroquias del país. En la práctica, lo proyectos grupales refutaron los mitos de la neutralidad y objetividad—elementos de la interpretaciones funcionalistas—de los medios de comunicaciones tradicionales y oficialistas. De este modo se puso en evidencia que el régimen militar utilizaba tanto el poder de las armas como el estatal en la convocatoria,

realización y liquidación de los espacios culturales, como en las posibilidades del uso de los medios de comunicaciones, especialmente la televisión, las diversas fuentes audiovisuales y sus aplicaciones, escuelas, universidades, plazas y edificios públicos. Desde esta perspectiva resultaba claro entender que la comunicación y sus múltiples expresiones sociales no eran una relación pura entre significados, significantes y referentes.

La comunicación oficial desarrollada durante el período del gobierno militar contiene toda su carga ideológica neoliberal y prácticas elitistas. Existe por que reproduce a las clases dominantes y por lo tanto el punto clave no reside en la explicación de la producción artística, literaria o cultural como génesis y origen de signos, sentimientos, emociones o pensamientos.

A partir del cuestionamiento del discurso oficial las expresiones artísticas alternativas y culturales pasan a concebirse como una práctica en el seno de la lucha ideológica que responden, cuestionan, rompen, solidifican o consolidan necesidades históricas y sociales propias de los grupos que se plantean la democracia versus el autoritarismo militar. Sin embargo, los individuos que participan en ellas no deben interpretarse como sujetos puros o absolutos puesto que al interior de los grupos en que actúan también existen importantes contradicciones que en algún momento tendrían que aflorar y enfrentarse. Por ejemplo, no todos los sectores de oposición al gobierno militar estaban en contra de la economía de libre mercado y el modelo económico neoliberal impuesto por las Fuerzas Armadas y el gran capital. Tampoco, no todos los grupos sociales y sus representaciones políticas compartían las mismas posturas con respecto al peso que el Estado debería tener en el funcionamiento de la economía. Y es a partir del retorno a la "democracia" y a la sociedad civil en 1990 que estas contradicciones se hacen más claras.

Paradójicamente, una vez que los militares se retiran a sus cuarteles la creatividad clandestina, solidaria, de denuncia y rebeldía comienza a acallarse hasta desaparecer; ahora, sólo se habla de empresas, del mundo de los negocios, del fútbol y de los modelos financieros de los "tigres" asiáticos, en donde Chile se ha convertido en el cachorro favorito, dispuesto a disputarles al resto de los felinos su "hábitat" comercial en el mercado internacional. Pareciera que, al mismo tiempo, el país comienza a perder su memoria histórica y los artistas, intelectuales, claustros universitarios, ahora en democracia, se centran alrededor de la libre empresa y se adaptan a sus esquemas organizativos y productivos. Como resultado, se multiplica e incluso promueve el llamado "sector informal", nuevo concepto para referirse a los ciudadanos desempleados y expulsados de sus fuentes laborales en aras de la privatización, la eficiencia productiva y el servicio de la inpagable deuda externa.

VI. LA IDEOLOGÍA DEL NEOLIBERALISMO CHILENO

Una de las características más notables de los promotores del neoliberalismo es la insinuación de que las ideologías, especialmente aquellas que hablan de cambios y transformaciones sociales radicales del capitalismo, reposan en el cementerio. Para muchos, las ideas revolucionarias y el socialismo han sido retirados de la circulación y condenadas al olvido, comenzándose así un proceso de *desideologización*. El proceso de desideologización se convierte en algo sin formas definidas y carente de contenido. Sus promotores invitan a *desideologizar* todo, empezando por la discusión política, continuando con las propuestas económicas y concluyendo con las relaciones internacionales. Visto desde otro ángulo, a través de la *desideologización* se invita a que se ideologice todo, pero en otro sentido. O sea, se invita a la aceptación de una nueva ideología. Y esta no es otra que la ideología del neoliberalismo.

Lo anterior se realiza en consultas con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras agencias crediticias que financian proyectos "nacionales", por parte de funcionarios, políticos e intelectuales "reciclados", que en el pasado fueron críticos y alzaron sus voces de protesta para denunciar a los militares cuando éstos hacían lo mismo.

La nueva ideología evita todo cuestionamiento al sistema capitalista y al modelo neoliberal propiciado por el Wall Street, el London y el New York *market*. No es bien visto profanar los principios y territorios de la libre empresa y el libre comercio propiciados por la invitación a *desideologizar*. Del mismo modo, es mal visto cuestionar o poner en duda los infinitos valores de la propiedad privada o el pensar que el Estado pueda involucrarse en actividades económicas como en el pasado. Así, se pretende erradicar del mapa político toda ideología que no coincida con la todopoderosa ideología del neoliberalismo. Junto al establecimiento del capital monopólico se impone también una ideología monopólica. Sin embargo los porfiados de todos los tiempos insisten en que el mundo está más ideologizado que nunca.

Para un importante sector de chilenos, el gran capital internacional y sus asociados nacionales intentan re-elaborar la historia de Chile fabricando diariamente leyendas, ilusiones y fantasías de acuerdo a sus intereses económicos y a la política neoliberal que los favorecen. Según estos sectores, cada día resulta más difícil en Chile contrarrestar la "versión oficial" de los monopolios informativos acerca de los acontecimientos mundiales. Con preocupación se preguntan, ¿cómo es posible hacerle llegar un mensaje alternativo a los ciudadanos cuando no se puede conversar con ellos a pesar que el país está invadido de computadoras, televisión por cable, fax, teléfonos celulares, videocaseteras y correo electrónico? En ese sentido, argumentan que pareciera ser que la sociedad chilena se encuentra frente a una situación en que sus miembros deben valerse del instinto y la

intuición para distinguir entre lo verdadero y lo falso, de la fantasía y la realidad. Sin embargo, insisten que la pobreza y la miseria son elementos concretos, vigentes y el pueblo busca respuestas a los innumerables problemas que los afligen.

A partir de esta visión, la información acerca de los sucesos del país y su modelo neoliberal muchas veces se confunden con la leyenda. Esto es más claro cuando se escuchan las interpretaciones oficiales. Una rápida mirada a las fuentes de origen demuestran que éstas son una sola: un grupo selecto de personeros oficiales o de las grandes corporaciones que hablan de los diversos episodios y sucesos nacionales e internacionales desde una sola perspectiva. Aunque la gran mayoría de los sectores sociales valoran los logros alcanzados por los gobiernos civiles a partir de 1990, muchos piensan que es perfectamente válido poner en duda la objetividad que pueda tener la interpretación oficial del modelo chileno. De ahí, entonces, que se pregunten, no sin razón: ¿pero, dónde están ahora esas interpretaciones alternativas o evaluativas, especialmente cuando el país se ve cada vez más convulsionado por los problemas económicos y sociales que afecta a grandes sectores de la población ?

Esta aproximación a la realidad nacional ha llevado a ciertos sectores críticos del nuevo modelo societal y su ideología neoliberal a continuar recolectando testimonios y escuchando las voces de aquellos que a través de la literatura, el teatro, la poesía, la música, el video y otros mecanismos similares intentan dar cuenta de los hechos y sucesos en que les ha correspondido participar, aunque éstos sean solamente versiones parciales de aquellos acontecimientos. Total, sostienen, el tiempo se encargará de ponerlos en su debido contexto para agregarlos a las páginas de la historia del país. De ahí surgirán nuevos modelos de sociedad, diferentes, más justos, de acuerdo a dichos sectores.

Se argumenta que durante el período del gobierno militar chileno existía una sola versión de lo que sucedía en el país y no pocos ciudadanos sostenían insistentemente que el tiempo les daría la razón acerca de la validez de sus luchas y los valores envueltos en ellas. Esta expresión de confianza en el futuro pareciera ser acertada si se entiende como una expresión de fe en las ideas y valores por los cuales los individuos están luchando o defendiendo. Es decir, a partir de la evaluación histórica de los acontecimientos pasados—con toda su parcialidad y subjetividad—el futuro reconocerá que esas ideas pueden ser realidades concretas a través de conocer los que hicieron sus actores y los objetivos que perseguían, si estaban en la razón o simplemente equivocados. En otras palabras, *era un emplazamiento que aún conlleva un convencimiento profundo de que las ideas y principios que se estaban defendiendo en Chile algún día serían una nueva realidad.* Esta confianza manifiesta, que la mayoría de las veces se ha expresado más como una profesión de fe por parte de los oprimidos que como algo concreto, tampoco implica que algún día la historia se escribirá con absoluta objetividad e imparcialidad.

Lo anterior se complica en la medida que coincidiendo con el cambio de siglo se observa un desarrollo inusitado de la ciencia de la publicidad, la ciencia de la propaganda en manos de las corporaciones de noticias y otros medios de comunicaciones masivas. Se argumenta que el mundo está más aislado que nunca cuando contradictoriamente, podemos ver en nuestros hogares a través de las pantallas televisivas el bombardeo de Irak en colores, los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atlanta, el mundial de fútbol en Francia, o el último recital de los tenores Pavarotti, Domingo y Carreras directamente desde Venecia.

Sin lugar a dudas el futuro juzgará rigurosamente los acontecimientos que se originaron en Chile para dar a luz al modelo neoliberal, así como se hizo anteriormente con la "vía pacífica al socialismo". Este modelo

neoliberal, presentado por algunos a los ciudadanos como el nuevo "Cristo redentor" de la economía nacional, junto a su ideología de la desideologización, también correrán la misma suerte. Desde ya, importantes sectores de la población sostienen que el supuesto éxito que se pregona se logró por medio de la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia, la represión y el exilio de miles de chilenos. Además, otros sectores significativos ya están sumando a esta lista las víctimas de la contaminación ambiental, el daño irreversible a la ecología nacional y los miles de accidentes provocados por los modernos automóviles que inundan las cada vez más numerosas carreteras y calles del nuevo tigre latinoamericano.

NOTAS

1. La explotación del enclave salitrero durante ocho décadas, hasta 1963, permitió a las compañías extranjeras, especialmente al grupo Guggenheim, obtener 3.937 millones de dólares en utilidades las cuales fueron repatriadas a sus respectivos países. Durante el gobierno del militar Carlos Ibáñez del Campo, a través de la creación de la Compañía de Salitres de Chile (COSACH), el Estado y el resto de las empresas salitreras privadas entraron en una asociación forzada con la Compañía Anglo Lautaro, de propiedad de los Guggenheim, pasando de este modo a adquirir el control de las ventas del salitre, con sus correspondientes beneficios (Labarca: 1969: 19).

La primera iniciativa en gran escala con respecto al cobre por parte del capital foráneo ocurre en 1904, con la adquisición de el Teniente por la Braden Cooper Company, creada por William Braden en sociedad con el Grupo Guggenheim, ambos de los EEUU. Sin embargo, debido a dificultades financieras para continuar operando, William Braden vendió su parte a los hermanos Guggenheim, quienes, con el apoyo financiero del banquero norteamericano J. P. Morgan iniciaron las operaciones de el Teniente, en 1911; al año siguiente, este mismo consorcio procede a

adquirir el rico mineral Chuquicamata. El mismo año 1916, el Grupo Guggenheim incorpora los yacimientos de el Teniente y Chuquicamata bajo una misma corporación, la Kennecott Copper Company. Debido a necesidades económicas para obtener financiamiento que les permitiera consolidar otras inversiones en la industria salitrera, sin embargo, el Grupo Guggenheim vendió el mineral de Chuquicamata a su competidor, la Anaconda Copper Mining Company.

La Anaconda, también norteamericana, se estableció en Chile el año 1916 con la formación de la Andes Mining Company y rival del Grupo Guggenheim. Las operaciones mineras de esta compañía también se concentraban en la región de Potrerillos ubicada al norte del país, quien, junto a El Teniente y Chuquicamata pasaron a constituir lo que se denominó la Gran Minería del cobre. Así, en un período de veinticinco años las operaciones extractivas y productivas de la Gran Minería del cobre, el "sueldo de Chile" como lo llamaría Salvador Allende durante su campaña presidencial de 1970, pasaron al control directo de dos corporaciones norteamericanas. Esta situación se mantendría hasta el año 1970 cuando el Gobierno de la Unidad Popular procedió a nacionalizarlas sin compensación alguna.

2. Al respecto véase el trabajo de Jaime Osorio, *Raíces de la democracia en Chile*. (México: Ediciones Era y Universidad Autónoma de México, 1990).

3. Es importante tener en cuenta que los sectores más radicalizados de este partido se integraron posteriormente al Partido Socialista o impulsaron políticas de alianzas y compromisos políticos con los partidos obreros.

4. Sobre este tema ver el trabajo de Tomás Vasconi y Marco Aurelio García, "El desarrollo de las ideologías dominantes en América Latina" en *Sociedad y Desarrollo* #1, Santiago de Chile, 1971, Pág. 97- 114.

5. Para una discusión más amplia acerca del modelo de substitución de importaciones recomendamos examinar el trabajo de Sergio Aranda y Alberto Martines, *La industria y la agricultura en el desarrollo económico chileno*, (1970).

6. El 11 de marzo de 1966, seis mineros y dos mujeres murieron cuando un regimiento del Ejército disparó en contra de los mineros de la mina de cobre El Salvador, ubicada en el norte de Chile, quienes realizaban una huelga de solidaridad con los mineros de la mina el Teniente en Rancagua. El 23 de noviembre de 1967 se produjo una nueva masacre, esta vez a manos del Ejército y la Fuerza Aérea, a raíz de una huelga convocada por la poderosa Central Unica de Trabajadores. De acuerdo a cifras oficiales, cuatro trabajadores y un niño perecieron en dicha ocasión. Durante las postrimerías del gobierno del Presidente Frei, en 1969, ocurrió una nueva acción de sangre en la sureña ciudad de Puerto Montt. Diez personas murieron una vez que las fuerzas militares desalojaron a un grupo de pobladores sin casa, que habían ocupados unos terrenos baldíos en la zona conocida como Pampa Irigoin.

7. El momento más álgido de esta situación ocurrió el 21 de octubre cuando el general de ejército Roberto Viaux encabezó un alzamiento del Ejército en contra del gobierno del Presidente Eduardo Frei. El centro de este movimiento militar fue el Regimiento Tacna a los cuales se les unieron la Escuela de Suboficiales y el Regimiento de Tanques. A medida que el conflicto avanzaba se fueron uniendo otros sectores militares tales como el Batallón Intendencia y la Academia de Guerra. El gobierno de Eduardo Frei finalmente logró un acuerdo con los militares rebeldes—Actas del Tacna—en la cual el General Viaux se comprometía a aceptar la autoridad presidencial y el general tomaba conocimiento de la renuncia del Ministro de Defensa. Al mismo tiempo, el gobierno se comprometía a solucionar los problemas económicos del Ejército. Al acta se unió un pacto verbal en el

que el Presidente Frei se comprometía a no tomar represalias contra los insubordinados, ni cambiar de su mando a ningún oficial implicado en el alzamiento militar.

8. En 1946, Gabriel González Videla, miembro del Partido Radical, ganó la elección presidencial con el apoyo de los partidos Comunista y Socialista con quienes mantenían una alianza política de más de diez años a través del Frente Popular. En 1948 rompió abruptamente con la coalición del Frente Popular, hizo aprobar la Ley de Defensa de la Democracia por la cual declaró al Partido Comunista fuera de la ley, desatando una fuerte política represiva en contra de dicho partido. Bajo la presión del capital extranjero, fundamentalmente de los EEUU, González Videla inició una política económica conservadora y subordinada totalmente a los intereses extranjeros, orientada a poner fin a las conquistas económicas y laborales adquiridas por los trabajadores durante los gobiernos del Frente Popular y a eliminar las barreras proteccionistas de la economía chilena, fundamentalmente en el sector industrial.

9. Petras y Morley señalan que a finales de 1970 las corporaciones extranjeras operando en Chile controlaban el 50% de las maquinarias y equipos; 50% de la producción y distribución de petróleo; 60% del hierro, acero y productos metálicos; 60% productos industriales y químicos; 100% de la industria automotriz, televisión y tabacos; y casi el 100% de la industria farmacéutica. Más importante, las corporaciones norteamericanas controlaban el 80% de la producción de cobre, el rubro más importante de exportación de la economía chilena (1975: 9).

10. Esta iniciativa por parte de la Administración Kennedy se inició el 13 de marzo de 1961, entendida como una sociedad entre EEUU y el resto de las Américas, la cual contribuiría a alcanzar las ansiadas vías del desarrollo material, social y económico para eliminar la pobreza y la miseria ancestral que

caracterizaban a la región. A pesar de las razones humanitarias esgrimidas por la Administración Kennedy para fundamentar este proyecto—desarrollo económico de la región—se mencionaban entre otras consideraciones al temor de reproducir nuevas explosiones sociales similar a la cubana. En ese sentido, más que un proyecto para alcanzar el desarrollo de la región la Alianza para el Progreso era una defensa en contra de posibles revoluciones o modelos nacionalistas y populistas que escaparan del control de Washington. Acerca de este tema existe un abundante bibliografía.

11. La Unidad Popular estaba formada por los partidos Comunista, Socialista, Radical, Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Acción Popular Independiente (API) y de Izquierda Democrática (ID). Posteriormente se sumaría la Izquierda Cristiana, un sector que se retiró del Partido Demócrata Cristiano. El Movimiento Revolucionario de Izquierda (MIR) decide prestar un apoyo crítico a la UP sin pasar a formar parte de la misma.

12. En el Programa básico de gobierno de la Unidad Popular se puede leer que “[. . .] la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio imperialista, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile” (Santiago: 1971). Al respecto ver también la recopilación de discursos de Salvador Allende, *La revolución chilena*. Buenos Aires: Editorial EUDEBA. 1973.

13. Para mayor información acerca de estas áreas de la economía ver el *Programa Básico de la Unidad Popular*. (Existen varias ediciones). México: Editorial Siglo Veintiuno. 1973.

14. Un análisis más detallado acerca del boicot económico al gobierno de la Unidad Popular puede encontrarse en el trabajo de E. Farnsworth et al., *Chile, el bloqueo invisible*. (Buenos Aires: 1973). También, ver el trabajo

del periodista norteamericano Jack Anderson, *Documentos secretos de la ITT*, publicado por la Editorial Quimantú en 1971.

15. Un buen ejemplo de esta estrategia la constituye el quiebre del Partido Radical, en donde una fracción importante de esa colectividad se retiró para formar el Partido de Izquierda Radical (PIR), uniéndose a las fuerzas de oposición a la Unidad Popular.

16. Para un estudio más completo del desarrollo de las divergencias al interior de la Unidad Popular ver el trabajo de Ruy Mauro Marini "Dos estrategias en el proceso chileno", publicado en México por *Cuadernos Políticos*, #1, julio-septiembre de 1974.

17. Durante las elecciones de marzo de 1973 los partidos contrarios al gobierno de la Unidad Popular se concentraron en torno a la estrategia electoral de reunir dos tercios de la votación, que de acuerdo a la legislación chilena les permitiría acusar a Salvador Allende en el Congreso Nacional de haber violado la Constitución del país y así derrocarlo legalmente de la presidencia del país. Los resultados de la elección excedieron tanto las expectativas del gobierno como las de la oposición al arrojar un significativo 44% en favor de la Unidad Popular, es decir casi un 10% más de los votos obtenidos cuando Allende fuera elegido Presidente de Chile en 1970.

18. Este modelo no era original, sino que había sido elaborado particularmente por Milton Friedman y Arnold Harberger, ambos ideólogos de la llamada "Escuela de Chicago". Para una crítica de este modelo neoliberal véase el trabajo de Andre G. Frank, "Radiografía económica del fascismo chileno; carta abierta aniversario a Arnold Harberger", en *Trimestre Ideológico*. # 16 (Caracas, octubre-diciembre de 1974).

18. El 5 de octubre de 1988 se realizó un plebiscito organizado por el gobierno militar orientado a institucionalizar al General Augusto

Pinochet como jefe del Estado chileno por un nuevo período de 8 años. Dicha convocatoria plebiscitaria contaba solamente con dos opciones, es decir, votar "Sí" o "No" por la continuidad del General Pinochet. A pesar que la oposición al gobierno de las Fuerzas Armadas sólo tuvo un muy limitado acceso a los medios oficiales de comunicaciones de masa, el 54% de los 8 millones de chilenos que concurrieron a sufragar lo hicieron por la opción del "No" al continuismo militar. De acuerdo a los compromisos políticos contraídos por el gobierno y la oposición, en caso de triunfar el "No" debería convocarse a una elección presidencial en 1989.

19. Acerca de los obstáculos hacia la transición a la sociedad civil en Chile ver mi trabajo "The Military State and the Chilean Dictatorship", Pág. 33 - 61 en *The Aftermath of the Military State in Latin America* (1990).

21. Al respecto quisiéramos remitirnos una vez más al libro del periodista norteamericano Jack Anderson, *Documentos secretos de la ITT*, ya citado en este trabajo. Ver también el informe *Inquiry into matters regarding classified testimony taken on April 22, 1974 concerning C.I.A. in Chile*. Este informe corresponde a la investigación realizada por el Subcomité de Inteligencia del Congreso norteamericano y publicado el 25 de septiembre de 1974.

22. Para un análisis más en profundidad acerca de la comunicación popular y alternativa en Chile ver mi trabajo "Alternative Popular Communication" *The Response to the Chilean Dictatorship* aparecido en la edición especial del *Canadian Journal of Communication*, de diciembre de 1988, págs. 49 - 65.

23. En este sentido, quizás, deberíamos entender la rápida tendencia a ignorar los acontecimientos que movilizaron a amplios sectores de la población durante el mes de junio y julio de 1996, cuando los mineros del carbón, en Lota, iniciaron una larga huelga

para protestar por el despido de más de 90 trabajadores por razones económicas por parte del gobierno. Expresiones de solidaridad de los diversos sectores de esa región, incluyendo el cierre del comercio, huelgas de hambre y marchas en Lota y Santiago parecen traernos de vuelta al período del gobierno militar. Una situación similar se observó con los estudiantes de las universidades estatales del país quienes, sin distinciones partidistas, incluyendo a aquellos se forman parte de los partidos de gobierno, se alzaron como una sola voz para protestar y rechazar la reforma universitaria que el gobierno quería imponer sin participación de la comunidad universitaria. Lo mismo sucedió con la huelga convocada por el Colegio de Profesores por mejoras salariales, en Octubre del mismo año, que paralizó las escuelas chilenas por dos semanas. Una vez terminado el conflicto magisterial se declaró un nuevo paro, esta vez por parte de los funcionarios municipales, con las mismas razones salariales, sin que los órganos informativos le proporcionaran a ninguno de ellos la atención e importancia que requieren.

BIBLIOGRAFÍA

Allende, Salvador (recopilación de sus discursos). *La revolución chilena*. (Buenos Aires: Editorial EUDEBA. 1973).

Anderson, Jack. *Documentos secretos de la ITT*. (Santiago: Quimantú. 1972).

Aranda Sergio y Alberto Martines. *La industria y la agricultura en el desarrollo económico chileno*. (Santiago: Instituto de Economía y Planificación de la Universidad de Chile. 1970).

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). *Magnitud e la pobreza en los años ochenta*. Estudios e informes, # 8, Santiago, 1991.

CIDEM-ILPES. *Elementos para un análisis de la intervención del Estado en la*

economía chilena. (Santiago: 1968).

Farnsworth E., R. Feimberg y E. Leenson. *Chile, el bloqueo invisible*. (Buenos Aires: Editorial Periferia. 1973).

Frank, Andre Gunther. "Superexploitation in the Third World" in *Two Thirds: A Journal of Underdeveloped Studies*. Vol. 1, #2, Fall 1978.

Frank, Andre Gunther. "Radiografía económica del fascismo chileno; carta abierta aniversario a Arnold Harberger", en *Trimestre Ideológico*. # 16 (Caracas, octubre-diciembre de 1974).

Gilbert, Jorge. "The Military State and the Chilean Dictatorship", en *The Aftermath of the Military State in Latin America* (Olympia: TESC: 1990).

Gilbert, Jorge. "Alternative Popular Communication: The Response to the Chilean Dictatorship" en *Canadian Journal of Communication*, Special Issue, diciembre de 1988.

Labarca, Eduardo. *Chile invadido*. (Santiago: Editorial Austral. 1969).

Marini, Ruy Mauro. *El reformismo y la contrarrevolución: estudios sobre Chile*. (México: Ediciones ERA: 1974).

Marini, Ruy Mauro. *Dialéctica de la dependencia*. (México: Ediciones ERA: 1974).

Marini, Ruy Mauro. "Dos estrategias en el proceso chileno", en *Cuadernos Políticos*, #1, México, julio-septiembre de 1974.

Osorio, Jaime. "Superexploitation and the Working Class: The Mexican Case" in *Two Thirds: A Journal of Underdeveloped Studies*. Vol. 1, #2, Fall 1978.

Osorio, Jaime. *Raíces de la democracia en Chile*. (México: Ediciones Era y Universidad Autónoma de México, 1990).

Petras, James y Morris Morley. *The United States and Chile: Imperialism and the Overthrow of Allende's Government*. (New York: Monthly Review Press: 1975).

Programa Básico de la Unidad Popular. México: Editorial Siglo Veintiuno. 1973.

Vasconi, Tomás A. y Marco Aurelio García. "El desarrollo de las ideologías dominantes en América Latina" en *Sociedad y Desarrollo* #1, Santiago de Chile, 1971.

Jorge Gilbert, es un sociólogo, periodista, catedrático y diplomático chileno. Actualmente ocupa el cargo de director del Center for Latin American Studies en la ciudad de Olympia, Washington y de profesor de Estudios Latino Americanos y Comunicación Social en el Evergreen State College, Olympia, Washington. Desde 1996 fue designado Cónsul Honorario de Chile en el Estado de Washington por el gobierno chileno, cargo que desempeña hasta hoy día.
